

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, noviembre tres (3) de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310502220160006401, promovido por la señora **MARÍA EDITH CÓRDOBA AGUDELO**, en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, donde se citó como interviniente excluyente a la señora **ERIKA MARCELA ZAPATA GONZÁLEZ**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **355**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## **ANTECEDENTES**

Pretende la demandante, que se condene a la pasiva al reconocimiento y pago del 100% de la pensión que recibía Orlando Emilio León Velásquez en calidad de cónyuge, mesada en cuantía de \$4.574.358, desde el 15 de mayo del año 2015, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento de lo pretendido expuso, que el señor Orlando Emilio León Velásquez falleció el 15 de mayo del año 2015, con quien se encontraba unida mediante rito civil. Solicitó el reconocimiento pensional adjuntando la documental que creyó daban de la calidad de compañera, pero su solicitud fue negada por la entidad. Comentó que desde el 5 de agosto del año 2011 de mutuo acuerdo se declaró disuelta la sociedad conyugal, pero a la fecha del deceso habían convivido durante 12 años y 7 meses sin procrear hijos.

Notificado del libelo gestor, la accionada no hizo pronunciamiento alguno, por lo cual, mediante auto del 1 de septiembre del año 2016 se dio por no contestada la demanda.

Mediante auto interlocutorio del 18 de mayo del año 2017 se ordenó citar como tercera excluyente a la señora María Edith Córdoba Agudelo, sin embargo, esta no compareció al proceso de la manera indicada en el artículo 63 del CGP.

En sentencia del 27 de agosto de 2019, se resolvió declarar de oficio probada la excepción de “inexistencia de la obligación” y absolver a la accionada Colpensiones de todas las pretensiones invocadas en su contra. Condenó en costas a la parte accionante y a favor de Colpensiones.

## **APELACIÓN**

El apoderado de la parte actora, expuso no compartir de la decisión tomada, toda vez que se hizo un estudio basado en supuestos y no en la realidad, pues los deponentes, expusieron que todo el tiempo entre la demandante y el finado

siempre hubo una relación de esposos, situación que se encuentra respaldada con el registro civil aportado. Además de ello, se dio credibilidad a un informe que no está firmado. Debe tenerse en cuenta que la pareja tuvo momentos en los que obviamente hubo desavenencias, sin que pueda pensarse que, desde el momento de la liquidación conyugal no hubo convivencia. Dicha afirmación va en contra de la realidad jurídica procesal. Los declarantes, apuntan a que la unión de la pareja se mantuvo, tuvieron bienes fuera del Municipio de Jericó, e incluso, acompañaron a amigos y familiares. Indicó, que el pensionado hubiere tenido en algún momento un romance furtivo no tiene por qué afectar el derecho pensional, ni tampoco las desavenencias temporales entre la pareja, ni que haya una liquidación de sociedad conyugal en la que se indique que hay arriendo por la habitación en un lugar específico. La existencia de peleas entre la pareja no se encuentra. Indicó que los hijos del primer matrimonio del causante expusieron no que no sabían, sino, que sabían de oídas y si bien para el juez no son convincentes, si se expuso que el negocio de la demandante se sostuvo por el apoyo de su esposo. Indicó que la tacha de los testigos le causa reparo, pues para unas cosas se acogió sus dichos y sobre otras no, por lo que hay una inaplicación correcta de la ley, en donde las pruebas no se toman en su aplicación lógica, correcta y jurídica. La separación no existió, solo hubo disolución de la sociedad conyugal, pero no se separaron de cuerpos. Los testigos al no departir de manera íntima con la familia no tienen la forma de indicar que no había ayuda mutua entre la pareja. Lo sustancial, que es, la convivencia si se encuentra probado, contrario a lo que dice el *a quo*, y si bien no son exactos los testigos, es porque cada uno tiene una percepción diferente de las cosas, y por tanto hay un error de apreciación probatoria. El hecho que haya aparecido alguien menor de 30 años que busca un beneficio económico, no le quita fuerza a la convivencia con la demandante, pues se da credibilidad a los dichos de la investigación administrativa por ser funcionario público por encima de la realidad. Se encuentran los elementos sustanciales, convivencia, matrimonio y la ayuda por lo que, si hubo un “romance” momentáneo, no se desvirtúa la convivencia, pues la cohabitación no es imperante ni tampoco el hecho que no tuvieran descendencia, por tanto, solicita se revoque la sentencia.

Corrido el traslado para alegar, las partes no hicieron pronunciamiento alguno.

## PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar; si la señora María Edith Córdoba Agudelo es beneficiaria o no de la pensión de sobreviviente causada con la muerte de su cónyuge el señor Orlando Emilio León Vásquez, de ser así, si es procedente el pago de intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

## CONSIDERACIONES

El sistema de Seguridad social integral, con el fin de amparar la contingencia denominada “muerte” y salvaguardar así el grupo familiar de la persona que fallece y percibía en el ahora finado parte coadyuvante de los ingresos familiares, reglamentó el reconocimiento de la que denominó “pensión de sobreviviente”.

Para la verificación de tal derecho, es imperativo determinar la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues la norma vigente para la época del hecho funesto es la que, debe aplicarse al momento de dar estudio a la procedencia o no de la prestación.

Reposa en la foliatura registro civil de defunción que da cuenta de la muerte del señor Orlando Emilio León Velásquez, tuvo lugar el 15 de mayo del año 2015, y conforme a la resolución 106879 de 2010 tenía la calidad de pensionado desde el 1 de octubre del mismo año. En atención a ello, la norma vigente era la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003 que, respecto a la calidad de beneficiarios de la prestación, indicaba:

**“ARTÍCULO 13.** Los artículos [47](#) quedarán así:

*Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar*

*que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

*b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

*Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.*

*En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;*

*c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes **y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;** y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo [38](#) de la Ley 100 de 1993;*

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente **de forma total y absoluta** de este;*

*e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.*

**PARÁGRAFO.** *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

Es importante precisar, que este articulado ha sido objeto de numerosas explicaciones sobre el alcance de lo que el legislador ambicionó proteger, bien por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional. Siendo claro que el señor Orlando Emilio León Velásquez ostentaba la calidad de pensionado al momento del deceso, es claro, que de acuerdo al literal a) de la normativa antes precitada, era imperativo que la cónyuge o compañera permanente inexorablemente acreditara una convivencia de 5 años con antelación al deceso, posición, que no ha sido uniforme respecto al afiliado, pero que no compete ampliar en el presente asunto.

En sentencia SU 108 de 2020 la Corte Constitucional explicó los elementos probatorios que deben estar presentes cuando se estudia la convivencia, pues puede darse el caso, que los cónyuges o compañeros permanentes no puedan cohabitar el mismo lugar, sin que ello rompa la convivencia de la pareja, pues en cada caso habrá de estudiarse las condiciones que dieron origen al rompimiento material. Esta precisión ha sido avalada por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el Liberal b), la Corte Suprema de Justicia posicionó desde el año 2012 una nueva interpretación en donde amplió la exegesis dada a dicho literal, en el sentido de aplicar la postura de otorgarle una cuota parte o la pensión a “quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello

*implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época”, esto debía aplicarse, a los casos en que no existiese compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, toda vez que “si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva”, quedando así armonizado el contenido de la citada norma con criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio en particular para cada asunto que se someta a escrutinio.*

Este criterio se ha venido aplicando de manera pacífica por ambos órganos de cierre, ya que no hay posturas encontradas, pues la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia la reiterado su posición en providencias recientes como SL 4962 de 2019, SL 359 de 2020, SL 966 de 2021 y SL 3251 de 2021, SL 633 de 2023, SL 638 de 2023 y la Corte Constitucional ha dado aplicación en sede de tutela. Igualmente, desde providencias como T-015 de 2017 y T-128 de 2016 se indicó la procedencia de la prestación al margen de la continuidad de nexos de ayuda mutua y apoyo.

Recientemente en la sentencia T 231 de 2022 se explicó:

*“43. Por otro lado, respecto del requisito de convivencia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han establecido que este puede acreditarse en cualquier tiempo, **independientemente del vínculo que haya mantenido el causante con el beneficiario que solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.** (subrayas y negrillas fuera del texto original)”*

Y en sentencia SL 638 de 2023 se enunció:

*Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1399-2018, última en la que señaló:*

*En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. En específico, en esa oportunidad señaló: (...)*

*El anterior criterio se reivindicó en las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL6519-2017, entre otras.*

*Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente. ”*

Si bien es pacífico el literal b) sobre la procedencia de la pensión de sobreviviente a la cónyuge que convivió con el causante durante cinco años en cualquier tiempo, se presenta otro punto en controversia entre las tesis de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y la Honorable Corte Constitucional, y es, en lo relativo si éste cónyuge separado de hecho, que



demuestra 5 años de convivencia con el causante en cualquier momento, debe o no tener sociedad conyugal vigente, pues la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación laboral en las últimas providencias ha omitido éste requisito, que la Corte Constitucional **expresamente exigió en la sentencia C 515 de 2019.**

En dicha sentencia, la Corte Constitucional, al estudiar una demanda donde se afirmaba que la norma vulneraba el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta. Frente a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes, por lo cual, no son sujetos de tratamiento igual; explicando que cuando se disuelve la sociedad conyugal, se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial y ello sumado a la separación de hecho de la pareja, conlleva a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos para derivar de allí la calidad de beneficiario; veamos:

*“...Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los **efectos de orden patrimonial**. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, **al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan**. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, **no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario...**”.*

Teniendo clara la posición de ambos órganos de cierre, debe decirse que bajo lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1990, la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio general, y, por tanto, esta Sala se atiene a ello.

Con las aclaraciones precedentes, se adentra a Sala en determinar, si la señora María Edith Córdoba Agudelo cumple o no, la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada con ocasión de la muerte del señor Orlando Emilio León Velásquez:

La prueba testimonial arrojó como hechos relevantes lo siguiente:

**Jaime Vargas Herrera.**

Refirió Vivir en Jericó, trabajó haciéndole construcciones al señor Orlando Emilio León Velásquez desde el año 2000, es decir, era trabajador de él. Conoció a la señora María Edith Córdoba Agudelo desde que empezó con las construcciones en Cauca Viejo, año 2002. Sabe que eran esposos. Orlando Emilio era el que llevaba los gastos en el hogar. En la relación entre la pareja desde el año 2002 hasta la fecha del fallecimiento no supo si se llegaron a separar en algún momento. No participo en las exequias del señor León Velásquez. No sabe si tuvieron hijos. Del año 2002 al fallecimiento no le conoció otra pareja al señor Orlando. No sabe si era pensionado, solo que trabajaba en una fábrica. Siempre vio juntos a la pareja. La pareja vivió en Cauca Viejo, luego en Jericó. Sabe que la señora María Edith tiene un almacén antes de la muerte del señor Orlando Emilio León. Los vio juntos hasta el año 2014, pero no está enterado si convivían juntos o no.

**Diego Restrepo Velásquez.**

Expresó residir en Jericó, es primo hermano del señor Orlando Emilio León Velásquez, conoció a la señora María Edith Córdoba por que fue su esposa, fue al matrimonio. Le consta que la pareja compartía espacios juntos. Dice que la pareja se casó hace 2 o 3 años mediante rito civil, en la casa de él, no recuerda bien la fecha de matrimonio. No sabe cuándo tiempo duró la relación de la pareja, pero más o menos 2 o 3 años. Explicó que el señor Orlando Emilio hizo dos construcciones. Que de la unión de la pareja no hubo hijos. Dice que el señor Orlando Emilio León veía por las obligaciones de la casa. Sabe que la señora María Edith tiene un negocio en Jericó y que convivía con el señor Orlando Emilio al

momento de su muerte. Dice que como primo hermano solo recuerda la convivencia, pero no sabe respecto de la disolución de sociedad conyugal. Expuso, que tiene dificultad para recordar fechas pues tuvo un accidente en la cabeza. La pareja vivía en frente del seminario y posteriormente en Felicina. Llegó a ver al señor Orlando Emilio con una u otra pareja, pero no sabe íntimamente qué pasaba. No sabe si cuando se disolvió la sociedad conyugal continuaron conviviendo juntos. Este testimonio no arrojó datos certeros, pues la ubicación temporal del deponente no fue clara.

**María del Socorro León Velásquez.**

Manifestó conocer al señor Orlando Emilio León Velásquez porque era su hermano. conoció a la señora María Edith Córdoba quien fue casada con su hermano. Expuso que pareja se casó en el año 2002 y convivió durante más o menos 15 años. En el año 2002 era notaría ad hoc y en su oficina se casó su hermano. Conoció que su hermano tenía una propiedad en Cauca Viejo, donde vivió con la esposa, la señora María Edith, después vivieron frente al seminario en Jericó. De dicho matrimonio no hubo hijos, no sabe si hubo separaciones, siempre los vio juntos. No sabe porque se dio la liquidación de la sociedad conyugal. Vivían en la misma casa. Parece que, su hermano en los últimos años tuvo a una “amiga”, eso fue antes de él morir. El continuó siendo amigo de la señora María Edith y continuó yendo a la casa. Ellos legalmente siempre estuvieron casados, se veían con frecuencia, se separaron, no se acuerda cuando, pero se veían con frecuencia y Orlando Emilio asumía los gastos de la casa. Ellos ya no eran pareja sentimental en el último tiempo. Cuando Orlando murió vivió en un apartamentico al frente de la alcaldía con una amiga y la señora María Edith vivía en la casa de Felicina, eso fue un mes antes que se fue a vivir con la amiga.

**Noralba Hernández.**

Declaró conocer al señor Orlando Emilio León Velásquez porque mercaba con la señora María Edith, lo conoce desde hace unos 15 años por ser ex propietaria de una distribuidora, y allí hacia el mercado el señor Orlando Emilio. Sabe que en el

matrimonio no hubo hijos. Nunca vio a la pareja separados. No le conoció otra compañera sentimental al señor Orlando Emilio. No supo de la liquidación de la sociedad conyugal.

Se recepcionó el interrogatorio de parte a la demandante donde indicó como hechos relevantes:

Vive en Jericó, vive en la calle 9 número 8-64, que por catastro aparece también como calle 10. Sabe que el señor Orlando Emilio estuvo casado antes con otra persona, con la que procreo los hijos Ricardo y Juan Camilo. Vivió con el causante en varias partes, iniciaron convivencia en el apartamento de una hermana de crianza del finado, después en la aldea de piedras hasta el año 2011 o 2012, y terminaron la convivencia en Felicina. Vivieron un tiempo también en envigado en un apartamento propio cuando él trabajaba en Industrias e Inversiones el Cid como contador. Vivieron juntos hasta el año 2015. Tuvieron problemas de pareja, pero no se separaron. Sabe que el señor Orlando Emilio Velásquez tuvo una aventura con otra persona, pero no convivió con ella. El señor Orlando falleció en el hospital San Rafael de Jericó, de un edema pulmonar. La hermana Socorro fue quien hizo todos los trámites de la velación. El seguro del auxilio funerario cubrió todo. Liquidaron la sociedad conyugal para tener todo organizado. Expuso que, la separación fue solo de bienes, no de cuerpos. Enunció que el señor Orlando Emilio tenía un apartamento alquilado al frente de la alcaldía por que tenía problemas de alcohol, entonces se quedaba allá. Le avisó de la muerte una hermana de él, pues al momento de enfermarse estaba en el apartamento que quedaba en la alcaldía. Explicó que el señor Orlando Emilio si tenía un apartamento, pero: *“siempre era conmigo, me visitaba en la casa, en el almacén donde yo trabajaba”*. *“el alquilo un apartamento, pero seguía la convivencia conmigo normal”*, *“separados nunca nos llegamos a separar”*.

El alquiló el apartamento dos o tres meses antes de morir.

### **Juan Camilo León Ospina.**

Hijo del causante. Vive en Sabaneta desde el año 2008, antes de ello en la estrella y antes en el estadio. Sabe que su padre estuvo con la señora María Edith hasta el

año 2015, cuando visitaba a su padre llegaba a un apartamento denominado cuatro vientos, la última visita fue en el año 2009. Dice que su papá tenía un apartamento en arrendamiento, aparte porque como tomaba mucho, explica que no volvió a la casa de ellos, se distanció de su papá porque él tenía un temperamento difícil y creo que había conseguido una “mocita” a ese apartamento, una pelada muy joven de nombre Erika. Explica que el señor Diego era vecino de su papá. Expuso, que conoció de la señora Erika en el mes de septiembre del año 2014 aproximadamente. Después de la muerte fueron a sacar las cosas del apartamento de ahí, y estaba dotado plenamente. Dos camas, sala, comedor, cocineta. Expuso que es posible que se hubieran separado por meses. Cuando el señor Orlando se agravó y lo llevaron al médico estaba con Erika.

**Ricardo Andrés León Ospina.**

Hijo del causante, nunca ha vivido en Jericó. Expuso que su padre se casó con la señora María Edith y que en los últimos años tuvo una “mocita” en los últimos años de su vida. hablaba con su papá “lo justo”, no le preguntaba sobre su vida privada. 15 días antes de su padre morir, fue a Jericó a visitar y se vio con su padre. En el último diciembre no se vio con él porque su padre no asistió a la reunión familiar. No sabe dónde vivía al momento de su muerte. Cuando su padre murió fue a una casa donde él vivía, un apartamento, allá tenía ropa, cama, y cosas. Allá estaban las cosas de su padre. No sabía con quién vivía su padre ahí, hasta que, una mujer dijo que las cosas que estaban ahí eran de ella, y le pertenecían porque ella vivía ahí con su padre. Su padre se la presentó alguna vez, pero el deponente nunca hablo con ella hasta ese día que, ella le informó que esos bienes muebles eran de ella con el señor Orlando Emilio, pero en su calidad de hijo, sintió que las cosas le pertenecían y las sacó. Recuerda que su padre en el parque una vez, en el parque, un año o año y medio anterior a la muerte se la presentó como Erika. No le consta que al momento de la muerte estuviera viviendo con la señora Edith. Me consta que en muchas ocasiones ellos se separaron en las casas en las que vivieron.

**Diego Emilio Santamaría.**

Primo hermano del finado, conoció a la señora María Edith en el año 2011. Supo del matrimonio, no asistió. Explica que la señora Erika fue la “amante” del señor Orlando. Indicó que el último mes o mes y medio de él estuvieron viviendo juntos. No sabe si la relación en ese momento continuó con María Edith, pues él le había ayudado a ella a construir una casa y ella estaba en esa casa, indica que es posible que ello se hizo con la plata que le quedó a ella de la separación de bienes que tuvo con él. Indicó que nunca tuvo conversación alguna con la señora Erika. El señor Orlando estuvo viviendo en un apartamento aparte.

Declaración extra juicio de:

Señor Juan Camilo León Ospina indicó: *“También me consta que mi padre le gustaba mucho ingerir bebidas alcohólicas, razón por la cual, tenía en arriendo un apartamento para estar tranquilo, compartir con sus amigos y hacer sus cosas privadas de manera que su esposa MARÍA EDITH no se incomodara, esto lo hacía de manera esporádica, teniendo en cuenta que nunca dejaron de vivir juntos. Me consta que mi padre ORLANDO EMILIO como adulto mayor de vez en cuando quería tener sus momentos privados al momento de su esposa.”*

León Opina Ricardo Andrés: *“mi padre vivía bajo el mismo techo, lecho y mesa con la señora MARÍA EDITH CÓRDOBA AGUDELO de manera singular e permanente y continua hasta el día de su fallecimiento... Mi padre me comentó que iba a liquidar la sociedad conyugal porque no tenía hijos con María Edith.... Nunca tramitaron el divorcio.... También me consta que mi padre le gustaba mucho ingerir bebidas alcohólicas, razón por la cual, tenía en arriendo un apartamento para poder estar tranquilo, compartir con sus amigos y hacer sus cosas privadas de manera que su esposa no se incomodara”.*

Diego Emilio Santamaría Velásquez: *“Hasta el momento del fallecimiento ósea, hasta el 15 de mayo del año 2015 el señor ORLANDO EMILIO, vivía bajo el mismo techo, lecho y mesa de manera singular, permanente e ininterrumpida con la señora MARÍA EDITH CÓRDOBA AGUDELO”*

Lina María Botero González: *“vivieron bajo el mismo techo y de forma permanente hasta el día de su fallecimiento el día 15 de mayo del año 2015 en el Municipio de Jericó.”*

En la investigación administrativa realizada por Colpensiones, de cara a establecer la calidad de beneficiaria de la demandante, recepcionó declaraciones de las que se extrae lo siguiente:

María del Socorro León Velásquez (hermana del causante).

*“Se casó con María Edith Córdoba por lo civil, con la señora María Edith no tuvo hijos, con ella vivió 10 años aproximadamente, en los últimos 10 se separó, pero eran amigos. Mi hermano vivió últimamente en el parque y también en varias partes e eran propiedad de él, aproximadamente duraron separados 8 meses”.*

Elkin de Jesús Loaiza Taborda.

*“Yo conocí a Orlando León...después tuvo una señora de nombre María Edith, no tuvo hijos de la cual se separó, después fue mi vecino en el Edificio Banco Agrario, el día que falleció lo llevé al hospital”.*

Sea lo primero indicar por esta Sala de decisión, que en lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia para acceder a la prestación derivada por muerte, la valoración de los medios probatorios debe realizarse de manera armónica, pues es claro que cada uno de los sujetos procesales incorpora al plenario distintos medios de convicción, algunos que se contradicen entre sí, pero está precisamente en las manos del juzgador extraer aquello que, llena su convencimiento, como la memoria episódica de los declarantes, las razones de sus dichos, la espontaneidad y claridad en sus exposiciones todo de cara a los documentales de prueba.

Para ello, entonces, la parte solicitante debe exponer aquello que brinde un mínimo de convencimiento judicial que forme una decisión argumentada, claro está, en toda la prueba arrojada al plenario. En atención a eso, el derecho

reclamado solo será concedido en la medida en que se demuestre en convencimiento de lo que con fuerza se asevera en el libelo genitor, pues no solo debe indicarse la calidad de beneficiaria y la convivencia efectiva, sino, crear la certeza de ello, de no ser así, de dejar una duda razonable al juzgador, la consecuencia lógica será la negativa de lo peticionado, como lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4060 de 2019:

*“Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.*

*Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró”*

Y es que, los testigos arrimados a este proceso, como elemento de convicción, deben ser revisados de cara a lo establecido en la sentencia SU 129 del año 2021 que, respecto a las reglas para la apreciación de la testimonial, explicó:

*“Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre “la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]”<sup>101</sup>. La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”*



De acuerdo a las explicaciones dadas por el máximo órgano constitucional, no basta con escuchar los dichos, sino, indagar las razones de ello, es decir, de dónde se extrae su conocimiento, para así, delimitar la certeza de lo que se expone, pues más allá de querer beneficiar a la parte que la convoca al proceso, debe reproducir aquellos hechos que presenció con la naturalidad propia de quien invoca aquello que se quedó en su memoria episódica.

En este punto debe explicar la Sala, que la convivencia no es solo la cohabitación de dos personas, o la simple interacción sentimental. Convivencia, definida jurisprudencialmente, se trata precisamente de:

*“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.*

Ello quiere decir, que, la vida en pareja como tal, corresponde a esa intención de compartir ideales, construir futuro, apoyarse emocional y económicamente sin que los inconvenientes temporales cesen ello, pues en providencia SL 803 de 2022 se aclaró:

*“Conviene además recordar que el hecho de que los cónyuges tengan domicilios diferentes ello no es determinante para concluir que entre ellos no existió una verdadera comunidad de vida, puesto que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general, el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los compañeros finalizar su unión marital, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar (CSJ SL 12029-2016).*

*Y es que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio (CSJ SL 3813-2020).*

*Existe una singular comunidad de vida en la convivencia de una pareja que debe ser evaluada bajo los aspectos particulares y circunstanciales de sus integrantes, de tal manera que es la real vocación de permanencia en este caso lo que debe prevalecer, el deber de asistencia y acompañamiento, así como la voluntad y la proyección de vida juntos, lo que no necesariamente impide que existan discusiones, desacuerdos que impliquen distanciamientos temporales.*

*Sin duda, en el caso concreto se trata de una pareja que convivió durante más de cinco años y que si bien se encontraba separada al momento de la muerte, pues el causante se encontraba visitando a su madre y teniendo ciertos altercados con la demandante, ello no indica que estuvieran separados definitivamente o que hubieren culminado su relación, puesto que continuaba el vínculo como pareja y la vocación de ayuda, apoyo y permanencia.”*

Igualmente, contrario a lo expuesto por el recurrente, debe recordarse que la investigación administrativa, elemento probatorio incorporado se asimila a un testimonio, por lo cual, deben atenderse sus dichos como ello. (sentencias SL 165 de 2018, SL 8980 de 2017 y SL 14498 de 2017), así mismo, se recuerda cómo, en audiencia del artículo 80 del CPT Y SS, se consideró que la tacha de testigos era extemporánea, siendo pertinente la valoración completa de los testimonios, pues debe decirse además que la tacha no implica la ausencia de apreciación de la deponencia, sino, la valoración más cuidadosa de la misma.

De la prueba recaudada y revisada de manera armónica, lleva a este Juez plural, a concluir, que en efecto la señora María Edith Córdoba Agudelo el 26 de octubre del año 2002 contrajo matrimonio civil con el señor Orlando Emilio León Velásquez, con quien, mediante escritura pública 267 del 5 de agosto del

año 2011 liquidó la sociedad conyugal, manteniendo incólume la unión conyugal.

Así mismo, de la valoración conjunta de los testimonios, bien los escuchados en audiencia, como las declaraciones extra proceso, y los dichos en los extra juicio aportados, se puede extraer que la pareja convivió en el Municipio de Jericó, sin embargo, la intención de apoyo mutuo, permanencia, cuidado, en los últimos nueve u ocho meses de la vida del causante, **no estuvo presente, pues ya el señor Orlando Emilio León Vásquez estaba viviendo la mayor parte del tiempo en un apartamento donde compartía ocasionalmente con otra fémima**, lugar, de donde su hijo el señor Ricardo Andrés León Ospina, como hijo, retiró la ropa y los elementos personales. De igual forma, la señora María del Socorro León Velásquez explicó que su hermano en los últimos meses de su vida vivía en un apartamento con una “amiga” pero que, visitaba a la señora María Edith, siendo ésta palabra común en los deponentes, es decir, que el pensionado visitaba a la señora Córdoba Agudelo, mientras departía con otra persona con la que compartía lugar de habitación, lo que sin duda alguna interrumpió la convivencia, pues ello no era una situación temporal, ni momentánea por el licor como se quiso hacer ver en las declaraciones extra juicio, sino, la voluntad de pernotar en un lugar diferente al que inicialmente tenía con la señora María Edith Córdoba Agudelo, sin la unión y apoyo mutuo que el legislador pretendió amparar, pues no quiso compartir las últimas festividades con dicho núcleo familiar, ya que **no eran pareja sentimental**.

No existen en el caso de marras elementos que den fe de la existencia de un proyecto de vida permanente, responsable, con acompañamiento espiritual e intención de permanencia con la señora María Edith Córdoba Agudelo, ya que la ausencia de cohabitación de la pareja, fue más allá de un simple disgusto, a la necesidad del señor Orlando Emilio León de la búsqueda de otro lugar para vivir, pues incluso de la constancia de afiliación a SaludCoop se observa que la dirección del afiliado cotizante, era Cra 3 numero 4º99-303, y la de la su cónyuge Cra 10 número 72-33, y es que, contrario a lo expuesto por el apelante, coherentemente los testigos si avizoran la existencia de un lugar de habitación

diferente, de por lo menos 7 u 8 meses anteriores a la muerte, sin que existiera relación sentimental entre la pareja para dicha data.

No se pasa de lado que, los testigos expresan que el señor el señor Orlando Emilio León Velásquez consumía licor, situación que reitera el apelante. Respecto al consumo de estas sustancias se ha indicado que es pertinente determinar si las separaciones dadas en la pareja son justificadas o no, es decir, si a pesar de estas el vínculo se mantuvo incólume o feneció, pues en contextos de dependencia a sustancias psicoactivas o al licor como sustancia primaria, el requisito de convivencia debe valorarse bajo los presupuestos del artículo 53 Superior, ello, en atención a que, si el presunto beneficiario en calidad de co-dependiente de una adicción ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”, no es posible negar la convivencia “*por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges*”, pues así la Sala de Casación Laboral ha explicado que “*en escenarios de este tipo no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes*”, máxime cuando “*la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y a la integridad personal*”. Empero, de los testimonios **no se logró evidenciar una situación de adicción o dependencia de la cual se constatará que la señora María Edith Córdoba Agudelo tuvo que separarse del señor Orlando Emilio León por dichos motivos.**

Así las cosas, al no encontrarse la señora María Edith Córdoba Agudelo en el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, es decir, al no haber convivido con el causante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, sino, para dicho momento estar separada de hecho y con disolución de la sociedad conyugal por escritura 267 de 2011, se muestra ***ausencia de lazos afectivos y económicos*** y en tales circunstancias, no tiene cabida invocar la calidad de miembro del grupo familiar del causante, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

Por lo anterior, esta Sala de Decisión Laboral, encuentra que no le asiste razón a la demandante, ya que, al haberse presentado la separación legal de cuerpos y de bienes, no se cumple con el presupuesto normativo consagrado en la norma citada,

la cual fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-515 de 2019.

No desconoce esta Corporación, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencias SL5169-2019, SL359-2021, SL1476-2021, SL3251-2021, ha reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes, pese a haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal, señalando que “...*la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial...*” (SL3251-2021); no obstante, se acoge el criterio de la Corte Constitucional, porque se ciñe a lo que dice la norma respecto a la exigencia de acreditar la sociedad conyugal vigente, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando se reclama en calidad de cónyuge superviviente, existiendo separación de hecho; requisito que no se cumple en el asunto bajo estudio.

Aunado a que en la Sentencia SU 298 de 2015, señaló esta Corporación, que en los eventos en que existen dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional, “...*es el precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional...*”. De igual forma, en la Sentencia T-109 de 2019, la Corte precisó que el precedente constitucional tiene “...*carácter vinculante, no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte...*”. Por su parte, en Sentencia SU354-2017 señaló que “...*los fallos emitidos por la Corte irradian dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son inter partes. No obstante, existe*

*un punto de encuentro y es que ambos fallos se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados...”*

Por tanto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **CONFIRMAR** la Sentencia de Primera Instancia.

Costas Procesales en esta instancia, a cargo de la parte demandante, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho en esta Sede la suma total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000).

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Costas Procesales en esta instancia, a cargo de la parte demandante, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho en esta Sede la suma total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000=).

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 80b5eff265ecdc3e3287774e79fe29b2864401e503ced890b2481a74d3e9ef12

Documento generado en 03/11/2023 03:22:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>